

Señores

**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA – CAQUETÁ**

E. S. D.

Rad. No. 180013333001**20220040400**. Proceso de Reparación Directa de **YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA** contra **CONSORCIO DEUS 2018, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y OTROS**. Llamado en Garantía: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

**Asunto:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

**RODRIGO ALBERTO ARTUNDUAGA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.724.012 de Neiva – Huila y portador de la T.P. No. 162.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, según poder que se anexa, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda incoada ante su Despacho por la señora YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA, en los siguientes términos:

**I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**AL PRIMERO.** NO ME CONSTA que la máquina excavadora tipo construcción marca KOMATSU de color amarillo, de línea PC200LC-8, modelo 2011, de Rodaje Orugas, sea de propiedad de la señora YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA, sobre el particular, me atengo a lo que se acredite en el curso del proceso.

**AL SEGUNDO.** NO ME CONSTA ninguno de los presupuestos fácticos descritos en el presente numeral, en tanto hacen referencia a redes viales a cargo de terceros, y por tanto exceden el ámbito de conocimiento de mi Mandante, de manera que me atengo a lo que se logre acreditar en el marco del presente litigio.

**DEL HECHO TERCERO AL SEXTO.** NO ME CONSTA lo descrito en los aludidos numerales, toda vez que los contratos celebrados en mención fueron elaborados y ejecutados por terceros ajenos a mi prohijada, de modo que me atengo a lo que resulte acreditado en el proceso que nos ocupa.

**AL SÉPTIMO.** ES PARCIALMENTE CIERTO, empero, SE PRECISA que mi prohijada expidió la póliza de Responsabilidad Civil derivada de Cumplimiento No. 0528929–4, con el fin de amparar **los perjuicios que cause el asegurado – CONSORCIO DEUS –** tanto en la modalidad de daño emergente, como de lucro cesante, al igual que los perjuicios extrapatrimoniales derivados de la ejecución del Contrato 724 del 19 diciembre 2017, que sirvió de fuente para la expedición de la póliza mencionada.

Ahora bien, la póliza referida contempla condiciones generales y particulares que definen los amparos, consagran exclusiones, límites al valor asegurado, entre otras condiciones contractuales, las cuales deben ser respetadas por las partes contrayentes. De suerte que, la póliza cuya afectación se persigue expresamente excluye los daños derivados de actos de terrorismo, insurgencia, entre otros (condición No. 1.22); en el mismo sentido, se tiene contemplada la siguiente exclusión “1. 16. *DAÑOS A O DESAPARICIÓN O HURTO DE BIENES AJENOS QUE EL ASEGURADO TENGA BAJO SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.*”.

**AL OCTAVO.** NO ME CONSTA el vínculo contractual mencionado, toda vez que mi prohijada resulta ser un tercero ajeno a dicho negocio jurídico, por lo que me atengo a lo que se pruebe en el marco del litigio, y en particular a lo que conste en el contrato de alquiler respectivo.

**DEL NOVENO AL DÉCIMO CUARTO.** NO ME CONSTA los términos, condiciones, objeto y partes del presunto vínculo contractual señalado en el numeral bajo estudio, al respecto, deberá considerarse que estos hacen referencia a un negocio jurídico de alquiler de maquinaria del cual no participó mi Prohijada, por lo que me atengo a lo que se pruebe en el marco del litigio, y en particular a lo que conste en el contrato de arrendamiento respectivo.

En todo caso, deberá tenerse en cuenta que los daños que reclama la demandante frente al CONSORCIO DEUS 2018 y ASTROCONSMO se derivan de la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento del cual mi prohijada no formó parte y tampoco amparó, tan es así que existen dos exclusiones expresamente aplicables en el Seguro de Responsabilidad Civil derivado de Cumplimiento No. 0528929-4, las cuales se transcriben a continuación: “**1.4. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO ASI COMO DE PACTOS QUE VAYAN MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO TAMBIÉN RESPONSABILIDADES AJENAS, EN LAS QUE EL ASEGURADO, POR CONVENIO O CONTRATO, SE COMPROMETA A LA SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE ORIGINAL.**”, así como la exclusión **1.6.** definida como “*DAÑOS A O DESAPARICIÓN O HURTO DE BIENES AJENOS QUE EL ASEGURADO TENGA BAJO SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.*”. En este orden, no existe responsabilidad de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA de cara a las pretensiones consignadas en el líbelo genitor.

**DEL DÉCIMO QUINTO AL DÉCIMO NOVENO:** NO ME CONSTA los presupuestos fácticos descritos en los numerales agrupados, habida consideración que las presuntas amenazas y extorsiones por parte de grupos al margen de la ley pertenecen a la esfera íntima de terceros ajenos a Mi Mandante, de suerte que me atengo a lo que resulte debidamente probado en el marco del presente litigio.

**AL VIGÉSIMO:** ES CIERTO, de conformidad con la información aportada por la Demandante; bajo este entendido, deberá apreciarse que la Póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento No. 0528929-4 presenta como exclusión los perjuicios devenidos directa o indirectamente de actos terroristas, en los siguientes términos: “*PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN RESULTANTES DE, SUCEDAN POR,*

*COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXION CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS A CONTINUACION SIN IMPORTAR QUE CUALQUIER OTRA CAUSA HAYA CONTRIBUIDO PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LOS DAÑOS, LESIONES Y/O MUERTE: GUERRA, INVASIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS (HAYA O NO DECLARACIÓN DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, PODER MILITAR O USURPADO, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR DE CUALQUIER CLASE, HUELGA, CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO O SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES, MOTÍN, DAÑO MALICIOSO, VANDALISMO O TERRORISMO. (...) PARA LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSIÓN, POR TERRORISMO SE ENTENDERÁ TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCIÓN O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR EL PÚBLICO EN TODO O EN PARTE.”.*

**DEL VIGÉSIMO PRIMERO AL VIGÉSIMO SEGUNDO.** NO ME CONSTA las declaraciones a que se hace mención, habida consideración que fueron realizadas por terceros distintos a mi Prohijada, de manera que me atengo a lo que resulte debida y suficientemente acreditado en el marco del presente litigio.

**AL VIGÉSIMO TERCERO:** NO ME CONSTA la denuncia penal por acción terrorista, ni el número de asignación a la misma por parte de la Fiscalía General de la Nación; en todo caso, es claro que la maquinaria presuntamente destruida se debió a una acción terrorista.

**AL VIGÉSIMO CUARTO.** NO ES CIERTA la atribución de responsabilidad que la parte Actora pretende endilgar a las demandadas, habida consideración que, si bien las autoridades están constituidas para proteger a toda persona residente en Colombia, el incendio de la maquinaria fue producto de un ataque de grupos armados al margen de la ley, lo que hace del hecho un caso fortuito o de fuerza mayor.

**DEL VIGÉSIMO QUINTO AL VIGÉSIMO SEXTO.** NO ME CONSTA lo afirmado en el presente numeral, toda vez que dicho presupuesto fáctico excede ampliamente el ámbito de conocimiento de mi representada, de suerte que me atengo a lo que resulte acreditado en el curso del proceso.

**AL VIGÉSIMO SÉPTIMO.** NO SE TRATA DE UN HECHO EN SÍ MISMO, en realidad se corresponde con un JUICIO DE VALOR que elabora la parte demandante, quien afirma se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del extremo pasivo en el presente asunto; de suerte que no me encuentro en la obligación de dar respuesta al mismo.

**AL VIGÉSIMO OCTAVO.** Siendo que en el presente numeral se hacen diferentes aseveraciones, resulta necesario dividir las así:

- De cara a la presunta responsabilidad del CONSORCIO DEUS 2018, se indica que dicha entidad asumió la guarda material del vehículo de propiedad de la demandante, situación que a la presente etapa procesal no ha sido desmentida por el Consorcio referido, por lo que, siendo esto así, estaríamos de faz a la configuración de la exclusión de que trata el numeral 1.6. del condicionado aplicable a la póliza por la que se llama en garantía a mi representada.

- Frente al DEPARTAMENTO DEL HUILA, y la responsabilidad administrativa devenida de este ente territorial, se configura una causa extraña bajo las modalidades de: i) hecho de un tercero o ii) fuerza mayor, caso fortuito; lo anterior, debido a que fue un acto terrorista de una organización irregular la que ocasionó el daño del que se duele la demandante. En todo caso, por tratarse de una obligación general, en cabeza de dicho ente territorial, de velar por la vida y bienes de los ciudadanos, tal obligación administrativa desborda el cumplimiento y ejecución del Contrato 724, del 19 diciembre 2017, en cuya virtud se expidió la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento No. 0528929-4, bajo tal consideración, la póliza en comento no puede verse afectada por las resultas de la relación procesal primigenia.
- En lo que respecta al EJÉRCITO y POLICÍA NACIONALES, se configura una causa extraña bajo las modalidades de: i) hecho de un tercero o ii) fuerza mayor, habida consideración que el Consejo de Estado ha señalado que la capacidad de acción de los militares, así como de las fuerzas del orden público, no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Ahora bien, cualquier responsabilidad administrativa de dichos entes se encuentra totalmente por fuera de la póliza por la que se llamó en garantía a mi representada, habida consideración que no se corresponde con alguna entidad asegurada en virtud de la plurinombrada póliza de seguro.

**DEL VIGÉSIMO NOVENO AL TRIGÉSIMO PRIMERO.** NO SE TRATA DE HECHOS EN SÍ MISMOS, en realidad se corresponden con un JUICIO DE VALOR que elabora la parte demandante, quien afirma se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del extremo pasivo en el presente asunto; de suerte que no me encuentro en la obligación de dar respuesta al mismo.

**AL TRIGÉSIMO SEGUNDO.** ES CIERTO según las documentales que obran al plenario.

## **II. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

De manera general, me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones propuestas por la parte Actora, teniendo en cuenta que no le asiste el derecho invocado, toda vez que no se configura responsabilidad en cabeza del CONSORCIO DEUS 2018 y el DEPARTAMENTO DEL HUILA, en consecuencia, de la llamada en garantía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA. Esto, debido a que frente al CONSORCIO DEUS 2018, se aduce que dicho ente asumió la guarda material del vehículo de propiedad de la demandante, de suerte que se le señala como responsable frente a la pérdida del automotor, en tal sentido, la entidad referida no puede ser hallada responsable en los términos mencionados, habida consideración que nos encontramos de cara a la configuración de una causa extraña bajo la modalidad del hecho de un tercero, toda vez que la maquinaria fue objeto de un atentado terrorista por miembros de grupos irregulares al margen de la Ley.

En punto a la falla en el servicio que se endilga frente al ente territorial mencionado, la misma deviene como causa directa de la obligación de velar por la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, situación que desborda el objeto del Contrato de Obra 724, del 19

diciembre 2017, en cuya virtud se expidió la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento No. 0528929-4, bajo tal consideración, la póliza en comento no puede verse afectada ante las resultas de la relación procesal primigenia.

De manera particular, frente a la pretensión primera, ME OPONGO en la medida en que la accionante no establece con claridad la razón o motivo por el cual debe proceder dicha declaración de responsabilidad administrativa frente a la universalidad de los demandados. Al respecto, deberá apreciarse que serán solamente las entidades del orden administrativo, encargadas de la salvaguarda de las personas y bienes, las que deban comparecer por la pretendida “*falla en el servicio*” ante la “*omisión*” en el cumplimiento de sus deberes. Frente a los terceros que no hacen parte de la organización del Estado, no procede una declaratoria de responsabilidad administrativa en tal sentido, de suerte que en este caso nos encontramos ante una indebida acumulación subjetiva de pretensiones, por lo que se debió separar los ruegos de la demanda en consideración a la responsabilidad que se le imputa a cada accionado.

Bajo esta ilación de ideas, se deberá diferenciar la responsabilidad que se le pretende endosar al CONSORCIO DEUS 2018 de las demás entidades accionadas, habida consideración que la misma se aprecia en el hecho “Vigésimo Octavo”, en el que se indica que el consorcio referido presentaba la guarda material del vehículo como consecuencia de la ejecución de un contrato de arrendamiento de maquinaria suscrito entre las partes; quiere ello decir, que dicha entidad, como no puede ser de otra forma, responderá por los perjuicios devenidos tan solo de la falta de cuidado frente al bien arrendado, empero, en el proceso de autos, es evidente que opera una causa extraña debido a que la maquinaria es destruida como consecuencia del hecho de un tercero, representado en el atentado terrorista perpetrado el 27 de septiembre de 2020. En cualquier evento, los acontecimientos presentados se encuentran excluidos de los amparos de la póliza.

En lo que atañe al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, cualesquiera que sean las resultas frente a dicho ente territorial, deberá apreciarse que su eventual responsabilidad no se deriva de la ejecución del contrato 724 del 19 diciembre 2017, sino como consecuencia de la obligación general de velar por la seguridad en su territorio, lo que quiere decir que se encuentra por fuera de cobertura de la póliza. En todo caso, el Departamento requerido tampoco podrá resultar condenado por cuanto las obligaciones de seguridad no son absolutas y deberá atenderse a cada caso según las consideraciones particulares.

De cara a la pretensión segunda, en el presente asunto no es procedente el reconocimiento y pago de perjuicios morales, habida consideración que se trata de la pérdida de un objeto material destinado exclusivamente a una explotación económica. En lo que respecta a la tercera pretensión, los perjuicios rogados no cumplen con lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado para su reconocimiento, debido a que no se corresponden con un daño cierto y concreto, por el contrario, nos encontramos de cara a un perjuicio eventual e hipotético y por ende no indemnizable.

Como fundamento de dicha oposición, se proponen las siguientes:

### **III. EXCEPCIONES A LA DEMANDA:**

**PRIMERA: INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CABEZA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE UNA FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD.**

De conformidad con lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia<sup>1</sup>, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de (i) un daño antijurídico causado a un administrado, y (ii) la imputación de este a la administración pública, ya por acción, ora por omisión de un deber normativo.

Frente a este primer elemento, el Consejo de Estado ha establecido que por “*daño antijurídico*” ha de entenderse aquella “(...) *lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho*” (...)<sup>2</sup>. Como elementos constitutivos del daño, el citado órgano de cierre, ha establecido que son “(...) **(1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo.** El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual... Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio (...)<sup>3</sup>

Verificada entonces la configuración del daño antijurídico, corresponde al Juzgador determinar si el mismo es imputable o no a la administración pública, para lo cual es importante tener en cuenta la existencia de dos ámbitos de imputación, el fáctico y el jurídico. En palabras del Consejo de Estado<sup>4</sup>, “*La imputación fáctica tiene como propósito determinar si el plano material, más no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico. (...) “En otros términos, la imputación fáctica -y con ella la imputación objetiva del daño- consiste en un estudio retrospectivo que recae sobre la acción u omisión del sujeto, mientras que la imputación jurídica supone la realización de un análisis prospectivo y netamente normativo dirigido a determinar si,*

---

<sup>1</sup> 1 artículo 90. Constitución Política de Colombia. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

<sup>2</sup> C.E, Sec. Tercera, Sent. 2009-00071, feb. 20/2020. M.P. María Adriana Marín.

<sup>3</sup> C.E, Sec. Tercera, Sent. 2010-00115, mar. 8/2018. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

<sup>4</sup> Exp. 21928. Sección Tercera. Subsección C. M.P. Enrique Gil Botero, del 05 de julio de 2012.

*una vez establecida la atribución material del daño, existe o no el deber jurídico subjetivo u objetivo de resarcir el perjuicio”.*

De la mano con lo anterior, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla los elementos constitutivos que estructuran la responsabilidad del Estado, cuales son: (1) **La falta o falla del servicio** de la administración por la acción u omisión de los agentes del Estado; (2) **El daño**, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, con todas las características para que sea indemnizable; y (3) **El nexo o la relación causal**, es decir, que el daño se generó como consecuencia directa e indefectible de la actuación de la administración, ya sea por acción o por omisión, relación causal sin la cual, aún demostrado un daño y una falla o falta del servicio, no puede haber lugar a indemnización.

Ahora bien, partiendo de lo anterior, el perjuicio cuyo resarcimiento persigue la demandante deviene como consecuencia del daño sufrido ante la pérdida de una maquinaria cuya propiedad reputa para sí misma, surgida con ocasión del acto terrorista de data 27 de septiembre de 2020, oportunidad en la que un grupo insurgente le prendió fuego al referido bien. Con ocasión de lo mencionado, necesario resulta referirnos al régimen de imputación aplicable al presente asunto así:

***“A. El régimen de responsabilidad estatal por daños ocasionados por actos de terrorismo provenientes de terceros”.***

*7. Los daños ocasionados por actos violentos de terceros no alcanzan, en principio, a comprometer desde un punto de vista ontológico la responsabilidad del Estado, por cuanto no existe por parte de este ninguna participación fáctica en el desarrollo causal; así pues, es indispensable interrogarse cuál es entonces el fundamento de la imputabilidad de la responsabilidad al Estado por los actos violentos de un tercero.*

*7.1. En reciente pronunciamiento de unificación, la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió la responsabilidad estatal por actos violentos de terceros, y señaló que así como la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación, el juez contencioso administrativo no puede escoger un único título de imputación en daños ocasionados por actos violentos de terceros, tales como ataques de grupos armados organizados al margen de la ley contra bienes o instalaciones del Estado, toda vez que en función de la situación fáctica probada dentro del proceso los escenarios pueden variar:*

*En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse*

*que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.*

*En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia<sup>31</sup>.*

*7.2. En aras de respetar el precedente de unificación en esta materia, se debe aclarar que esta decisión de unificación, si bien, enmarca el desarrollo de la situación fáctica del caso concreto al título de imputación del daño especial, no por ello todos los casos de responsabilidad del Estado por hechos violentos de terceros, en el contexto del conflicto armado interno, se deben encauzar en el mismo título de imputación, máxime cuando la sentencia dejó en órbita de autonomía al juez para su configuración, de acuerdo a las diferentes variables fácticas y jurídicas que pueden presentarse en cada caso.*

*(...)*

*7.5. La Corporación ha considerado que el fundamento para declarar la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo, radica en la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial, aplicados de manera convergente, excluyente o alternativa<sup>44</sup>; sin embargo, teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado interno y la sujeción al bloque de juridicidad compuesto por obligaciones de linaje convencional y normas nacionales, es menester analizar, en primer término, la existencia de una falla del servicio dentro del régimen subjetivo de responsabilidad donde se dilucide si en la producción del daño intervino un comportamiento reprochable o ilícito del Estado, enmarcado en las obligaciones funcionales a cargo de la entidad demandada, esto es, una clásica falla en el servicio, base constitutiva por antonomasia del deber de reparación.*

*7.6. De lo anterior, podría concluirse que si existe una falla en el servicio, los títulos de imputación enmarcados dentro del régimen de responsabilidad objetiva se hacen inoperantes y no pueden, en principio, llegar a constituir el fundamento de la responsabilidad, por cuanto estos últimos se edifican sobre conductas de origen lícito y legítimo....”*

*7.7. En tal virtud, el régimen subjetivo de responsabilidad no puede cohabitar conceptualmente con los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros, cuando se revela del plenario la existencia de una falla ostensible y clara a cargo de la entidad demandada; por lo tanto, la aplicación de estos regímenes es subsidiaria respecto del régimen de responsabilidad subjetiva. Lo anterior no significa que si no se demuestra una falla del servicio, que constituya el fundamento de la imputación del daño antijurídico al Estado, necesariamente se negaría la responsabilidad; por el contrario, habría que analizar el caso concreto a la luz de la*



responsabilidad objetiva, en orden a garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral<sup>45</sup>. **Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B. C. P. RAMIRO PAZOS GUERRERO, del 26 de junio de 2014. Rad 05001-23-31-000-1998-03751-01 (26161).**

En aplicación del precedente jurisprudencial transcrito *ad supra*, se tiene que la responsabilidad administrativa proveniente de actos de terrorismo de terceros debe ser estudiada bajo el prisma de la configuración de una FALLA EN EL SERVICIO ante la presunta OMISIÓN de la administración en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección a las personas y sus bienes dentro del territorio de su jurisdicción. De suerte con lo anterior, se tiene que no existe prueba alguna al plenario que permita evidenciar, al menos frente al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, una falla en el servicio, puesto que no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la responsabilidad administrativa del Estado<sup>5</sup>.

Así pues, en caso de no acreditarse los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, ruego al Sr. Juez, así sea declarado en el presente asunto.

## **SEGUNDA: INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA PRESUNTA FALLA DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y EL DAÑO ALEGADO POR LOS DEMANDANTES.**

La referida excepción se funda bajo la premisa que no es posible condenar a una entidad administrativa sin haberse demostrado cabalmente la relación de causalidad entre el daño antijurídico presuntamente padecido por la parte demandante y la hipotética falla en el servicio.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 05 de mayo de 2002, con C.P. María Elena Giraldo Gómez y número de radicado 70001-23-31-000-1994-3477-01(13477), estableció la importancia de probar el nexo causal, en los siguientes términos:

***“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni***

---

<sup>5</sup> Expediente No. 26267. Rad. 200004184. Sección Tercera. Subsección A. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 10 de julio de 2013. *“Pues bien, en el presente caso, como se dijo, no se acreditó la falla en el servicio deprecada, toda vez que no se demostró que la entidad demandada hubiere faltado a los deberes de vigilancia y custodia en los términos en que se expusieron en la demanda, ni mucho menos de que se hubiese solicitado su presencia en el lugar de los hechos, sin que resulte procedente frente a este caso acudir a un régimen objetivo de responsabilidad, usualmente aceptado por el criterio mayoritario de la Sala respecto a la ocurrencia de actos terroristas, como también lo pretende la parte actora, toda vez que no se reúnen los supuestos de la jurisprudencia -mayoritaria- del Consejo de Estado ha considerado con tal propósito, <pues para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado en principio se requiere que haya sido dirigido contra una institución militar o policía, o un funcionario representativo del Estado, ya que bajo estas especiales circunstancias es que se genera en la carga que el particular no tenía la obligación o el deber de soportar.>”*

*presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante.”*  
(Se resalta).

En el caso que nos ocupa, pese a que ni siquiera se ha logrado acreditar la falla en el servicio que se pretende imputar al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, menos se puede hablar de la existencia del nexo causal entre el presunto daño antijurídico, padecido por la señora YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA, con obligación alguna a cargo del aludido ente territorial que fuera incumplida, ora por acción ya por omisión.

De esta manera, deberá declararse probada la excepción presentada.

### **TERCERA: CONFIGURACIÓN DE CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA – CAUSA EXTRAÑA BAJO LA MODALIDAD DEL HECHO DE UN TERCERO.**

La causa extraña ha sido entendida como aquel hecho externo imprevisible e irresistible que determina de manera exclusiva la ocurrencia del hecho lesivo. Cuando este evento se presenta, al demandado no le es imputable jurídicamente ninguno de los daños sufridos por quien ostenta la calidad de víctima. En estos casos, sin importar a cuál de las instituciones de la responsabilidad civil se acuda, se obtendrá, inexorablemente, la misma consecuencia jurídica: eximir al demandado de responsabilidad.

Consideración que ha sido compartida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, al establecer con claridad como la prueba del hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor rompen cualquier estudio de responsabilidad en cabeza del demandado. En ese sentido, la sentencia con radicado 19548 del 22 de junio de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado es clara en señalar:

*“Es preciso resaltar que la jurisprudencia nacional<sup>87</sup> ha reconocido la existencia de cuatro **causales que impiden la imputación de responsabilidad a la administración, a saber: fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero y hecho de la víctima.** En efecto, **los aludidos eventos “dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo”<sup>88</sup>**”* (Negrilla ajena al texto original)

Así pues, la responsabilidad patrimonial del Estado no se ve comprometida cuando la entidad administrativa logra acreditar la existencia de una de las causales exonerativas de responsabilidad, dentro de las cuales tenemos el hecho de un tercero el cual se encuentra probado en el presente asunto, en los siguientes términos:

#### **○ EXCLUSIÓN POR EL HECHO DE UN TERCERO.**

Frente a esta modalidad de causa extraña, expresamente predicable frente a riesgos derivados de atentados terroristas, el Consejo de Estado ha establecido que:

*“36. Finalmente, cabe señalar que en este tipo de eventos puede invocarse y operar como causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero frente al cual era la demandada la que tenía la carga de probar que dicha causa fue exclusiva o única, y determinante, de tal forma que lleve a enervar la responsabilidad del Estado. Así mismo, se puede llegar a examinar el caso desde la perspectiva de la concurrencia causal entre el hecho de un tercero...” (...)*

*“No se trata, no obstante, de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos del particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones positivas”.*

En el mismo sentido, debemos aludir a la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Magistrado Ponente. Guillermo Sánchez Luque. Radicación número:25000-23-26-000-2005-00440-01(65853), del 30 de marzo de 2022, en la que se exonero de responsabilidad al Estado bajo el análisis juicioso y ponderado de la imprevisibilidad e irresistibilidad frente al ataque orquestado por las FARC, al respecto se resalta el siguiente extracto:

*“El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo.*

*La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades militares estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades.”.*

Bajo el anterior criterio, resulta palpable que la responsabilidad de la administración no es absoluta e ilimitada ante la ocurrencia de actividades terroristas, habida consideración que, tal y como con claridad y precisión lo expresa la jurisprudencia en cita, se deben atender a criterios tales como *el conocimiento de una situación real e inminente de peligro y a las posibilidades razonables de evitar la materialización de este tipo de riesgos*. Situaciones que no convergen en el presente asunto, de suerte que mal podría verse involucrada la responsabilidad administrativa del Estado en el asunto bajo estudio.

Así las cosas, ruego al honorable Juez de conocimiento se sirva tener por acreditada la presente exceptiva.

**CUARTA: INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONSORCIO DEUS 2018 – FRENTE AL CONSORCIO OPERÓ LA CAUSA EXTRAÑA EN LA MODALIDAD DEL HECHO DE UN TERCERO.**

Tal y como se indicó al momento de realizar la Oposición a las Pretensiones de la Demanda, en el asunto bajo estudio se desprende que la obligación de custodia de la maquinaria de propiedad de la demandante surge con ocasión a la celebración de un contrato de arrendamiento suscrito entre la señora YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA con la sociedad ASTROCONSMO, quien a su turno celebró otro contrato de arrendamiento con el CONSORCIO DEUS 2018 por la misma maquinaria.

En efecto, en los presupuestos fácticos del libelo genitor se dejaron consignadas las siguientes consideraciones:

*“8. - El CONSORCIO DEUS 2018 con el fin dar [sic] cumplimiento al Contrato de Obra pública No. 724, para la ejecución de trabajos de remoción de tierra y excavaciones, en el año 2020 suscribió contrato de alquiler de maquinaria con la empresa ASOTRANCONSMO”.*

*“9. - Que a su vez y con el objeto de poner maquinaria a disposición del CONSORCIO DEUS 2018 la empresa ASTROCONSMO suscribió con la señora Yorling Estefany Castañeda Tejada, el contrato de alquiler de maquinaria No. 06-2020 del 21 de julio de 2020, cuyo objeto fue, el alquiler de una MAQUINA EXCAVADORA MARCA KOMATSU DE ORUGA LINEA - PC200LC-8MODELO 2011, para (el servicio de excavación y movimiento de tierra) ser usado en los trabajos de pavimentación Km 20 vía Morelia – Valparaíso – Solita. En dicho contrato se estableció un plazo de 4 meses contados a partir del 22 de julio de 2020 hasta el 21 de noviembre de 2020, prorrogables según el clausulado del contrato”.*

En igual sentido se refieren los hechos del 11 al 14, así como al Vigésimo Octavo, oportunidad en la que señaló *“28.- Se le atribuye responsabilidad al CONSORCIO DEUS 2018 y (los socios o consorciados) dado que desde el 21 de julio de 2020 la máquina fue dejada a su disposición; es decir de esta fecha asumió la guarda material de la maquinaria al servicio de la obra y durante su uso fue negligente y la dejó expuesta en la vía sin una debida protección. Dicho de otra forma, no tomó las precauciones necesarias para conservar la integridad del bien mueble en custodia, y no solicitaron vigilancia y protección a la fuerza pública”.*

En consecuencia con los hechos de la demanda, se advierte que la responsabilidad del CONSORCIO DEUS 2018 no puede estudiarse bajo el análisis de la responsabilidad de las entidades administrativas, por cuanto la fuente del derecho exigido emerge de las condiciones contractuales consignadas en los distintos contratos de arrendamiento, por tanto, ante este escenario, nos encontramos frente a una responsabilidad contractual del orden civil, por lo que su análisis deberá acometerse según las estipulaciones que rigen las obligaciones de los extremos contractuales.

No obstante lo anterior, cualesquiera que sean los resultados del estudio del asunto contractual en materia civil reseñado en antelación, su exigibilidad se encuentra condicionada a la causa extraña del hecho de un tercero ante el atentado terrorista que conllevó la destrucción del objeto arrendado.

Así pues, de faz a las obligaciones de mi representada frente a cualquier pronunciamiento relacionado con la responsabilidad del consorcio referido, y ante una hipotética e improbable exigibilidad de la cobertura de la póliza de Responsabilidad Civil derivada de Cumplimiento No. 0528929-4, al caso en estudio le resultan aplicables las siguientes exclusiones:

1. Por tratarse del presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de maquinaria, se evidencia que tal circunstancia no presenta cobertura por la siguiente exclusión: *"1.4. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO ASI COMO DE PACTOS QUE VAYAN MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO TAMBIEN RESPONSABILIDADES AJENAS, EN LAS QUE EL ASEGURADO, POR CONVENIO O CONTRATO, SE COMPROMETA A LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE ORIGINAL.*
2. En relación con el argumento que la custodia de la máquina estaba en cabeza del CONSORCIO DEUS 2018, por cualquier razón que corresponda, se aplica la siguiente exclusión *"1.16. DAÑOS A O DESAPARICION O HURTO DE BIENES AJENOS QUE EL ASEGURADO TENGA BAJO SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.*
3. Con ocasión del atentado terrorista cometido el 27 de septiembre de 2020, le resulta aplicable la siguientes exclusiones: *"PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN RESULTANTES DE, SUCEDAN POR, COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXION CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS A CONTINUACION SIN IMPORTAR QUE CUALQUIER OTRA CAUSA HAYA CONTRIBUIDO PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LOS DAÑOS, LESIONES Y/O MUERTE: GUERRA, INVASION, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (HAYA O NO DECLARACION DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELION, REVOLUCION, INSURRECCION, PODER MILITAR O USURPADO, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR DE CUALQUIER CLASE, HUELGA, CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES, MOTIN, DAÑO MALICIOSO, VANDALISMO O TERRORISMO.*  
*PARA LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, POR TERRORISMO SE ENTENDERA TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA*

VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCION O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR EL PUBLICO EN TODO O EN PARTE.”.

En consideración a los anteriores argumentos, en el asunto que nos ocupa no se encuentra acreditada la responsabilidad del CONSORCIO DEUS 2018, situación que relevaría al Despacho del estudio del llamamiento en garantía. Sin embargo, en caso que el señor Juez determine lo contrario, la póliza por la que comparece al presente proceso mi prohilada no brinda cobertura, de conformidad con las razones expuestas en el presente medio exceptivo.

Ruego al señor Juez de lo Contencioso Administrativo tener por acreditada la presente excepción.

**QUINTA: TASACIÓN EXCESIVA DEL PERJUICIO PERSEGUIDO – EL DAÑO ANTIJURÍDICO QUE SE RECLAMA ES HIPOTÉTICO Y POR ENDE NO INDEMNIZABLE.**

Para que resulte procedente la indemnización de un perjuicio, el mismo debe ser directo, personal, cierto y debe existir relación de causalidad entre estos; lo que deja sin efectos la indemnización de daños hipotéticos o eventuales. En otras palabras, el perjuicio causado no es materia de presunción legal y como derecho patrimonial debe ser petitionado y probado en el proceso.

Al respecto, el Consejo de Estado, en Sección Tercera, Expediente No. 2574 del 6 de marzo de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, al abordar el tema del daño ha señalado que:

***“En el presente caso encuentra la Sala que este primer elemento, necesario para configurar la responsabilidad del Estado, no se encuentra acreditado, por cuanto, como se advirtió en precedencia, para que el daño antijurídico sea tal, debe contar entre sus características con la certidumbre, esto es, que no sea una lesión eventual o apenas hipotética; por el contrario, se exige que sea un perjuicio cierto, aunque el mismo puede ser futuro. (...)***

***De lo anterior se concluye que en el caso sub judice no se cumple el primero de los requisitos a examinar para verificar si es posible configurar la responsabilidad del Estado, cual es la exigencia de un daño antijudío cierto. Por ende, huelga cualquier consideración sobre la imputación en el caso concreto, ante la inexistencia del primer elemento; en este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia primera de instancia que se inhibió de fallar el fondo del asunto y en su lugar denegará las pretensiones de la demanda”***

De igual forma, el Doctor Fernando Hinestrosa, en su libro Curso de Obligaciones (Conferencias), pág. 335, señala que ***“se debe reparar el daño y nada más que el daño, por lo cual se destaca la importancia que en este terreno tienen las pruebas, pues se requiere certidumbre de la realidad del perjuicio y de su cuantía, para así proferir las condenas pertinentes...”***, conviene subrayar que lo anterior resulta ser verdad ineludible, en la medida en

que si se llegare a indemnizar por un valor mayor al que realmente se tiene en relación con el perjuicio causado, se estaría incurriendo en un enriquecimiento sin causa lícita.

Respecto de lo manifestado anteriormente, en el hipotético evento en que exista algún tipo de responsabilidad predicable del CONSORCIO DEUS 2018 y del DEPARTAMENTO DEL HUILA, en calidad de entidades llamantes en garantía de mi prohilada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, nos encontramos de cara ante la inexistencia de la totalidad de los perjuicios alegados en la demanda o, subsidiariamente de una tasación excesiva e injustificada de los mismo, por las razones que pasan a exponerse:

- **PERJUICIOS INMATERIALES**

- **CON RESPECTO AL DAÑO MORAL PROVENIENTE DE LA PÉRDIDA DE COSAS MATERIALES.**

La Demandante, en calidad de presunta víctima directa, por medio de su apoderado judicial petitiona el reconocimiento de sumas por concepto de daño moral, que supuestamente derivan del acto terrorista causado el 27 de septiembre de 2020, oportunidad en la que resultó incinerada la maquinaria descrita en el libelo introductor.

En lo que concierne a esta tipología de perjuicios, el H. Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, radicado No. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), definió el perjuicio moral como aquel que *“... se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.”*

Respecto del daño moral derivado de la pérdida de cosas materiales, resulta procedente acudir a la tesis sostenida por el Consejo de Estado, según la cual, si bien se da lugar a la indemnización de perjuicios morales por la destrucción o pérdida de cosas materiales, *tal situación tan solo se presenta cuando se determine la existencia de sentimientos de aflicción, dolor o tristeza en los actores y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. **Adviértase que lo que constituye objeto de indemnización en esta tipología del daño no es la pérdida de la cosa como tal o el normal lamento, dolor o tristeza del afectado por el simple hecho de ver menguado, destruido o desaparecido un bien de su propiedad; por el contrario el criterio que la jurisprudencia ha destacado para proceder a indemnizar en estos casos el daño moral se cifra en la profunda aflicción generada en el actor por la pérdida de su bien. Y prueba de esta profunda aflicción radica en demostrar la valía particular y subjetiva que para el afectado reportaba dicho bien, ora por razones personales o de índole familiar, por citar solo dos ejemplos, que lleven a considerar fundadamente que desde la perspectiva de la víctima dicho bien (que en general puede ser apreciable patrimonialmente) se presenta como único e irremplazable a la luz de sus consideraciones personales y subjetivas, de manera que se entienda que se trató de un atentado al patrimonio moral (que no material) del sujeto; es por ello que se ha dicho que “la pérdida de las cosas, por si misma, no amerita su reconocimiento”.***

En el caso objeto de estudio, el bien inmueble simplemente constituía una fuente de explotación económica, por tanto, su función era exclusivamente, según el dicho de la parte actora, generar renta, lo que no coincide con la tesis acogida por el Consejo de Estado, de suerte que este perjuicio no puede reconocerse.

Ruego al Señor Juez tener por acreditada la presente excepción.

- **PERJUICIOS MATERIALES**

- **DAÑO EMERGENTE.**

En línea con lo señalado en punto de la oposición a las pretensiones de la Demanda, debe reiterarse al Sr. Juez como el Extremo Actor incurre en un yerro importante al momento de estructurar sus pretensiones indemnizatorias de perjuicios materiales. Al respecto, con miras precisar con la claridad requerida el alcance del Daño Emergente y el Lucro Cesante, y por contera, las exigencias probatorias para cada tipología de perjuicio, es menester acudir a lo desarrollado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia 21564 del 29 de julio 2013, así:

*“16.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido los perjuicios materiales en dos modalidades, a saber: (i) daño emergente y (ii) lucro cesante; lo que supone que ambas modalidades refieren a situaciones distintas, cuyas nociones se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil (...)*

*(i). En ese orden de ideas, el daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad –para el afectado– de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. **El daño emergente necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso**, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega.*

*(ii). Por su parte, **el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima**. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesorio del hecho dañoso, por cuanto no es causada de manera directa con su ocurrencia sino que esta sujeta a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria.”* (Negrilla es propia)

Siguiendo el criterio jurisprudencial en cita, corresponde descender al caso concreto, se ruega al Sr. Juez de Conocimiento tener presente la total inexistencia de cualquier prueba o soporte al Plenario tendiente a acreditar la existencia de una real afectación económica en cabeza de la Demandante y que derive del presunto accidente reclamado. Precisamente, considerando la naturaleza material del Daño Emergente, debe probar la Activa un verdadero egreso de su patrimonio, un real detrimento de su capacidad económica, carga que al Plenario no se ha cumplido.



En mérito de lo expuesto, ruego al Honorable Juez a declarar probada la presente excepción

○ **EN LO TOCANTE AL LUCRO CESANTE.**

En lo que respecta a la pretensión destinada al reconocimiento de LUCRO CESANTE debe tenerse en cuenta que el mismo a la fecha, resulta eventual o hipotético, puesto que no existe certeza respecto de su existencia. Para lo cual, conviene prestar especial atención a lo desarrollado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de radicado 4537 del 01 de junio de 2022 y con Ponencia del Consejero NICOLÁS YEPES CORRALES, en los siguientes términos:

*“En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido reiteradamente, que **se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño**, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. Asimismo, la Corporación ha considerado que **como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente**<sup>93</sup>, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activo, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.”* (Negrilla es propia)

En los términos expuestos por la referida corporación, no cabe reconocer indemnización por lucro cesante en ninguna de sus modalidades, consolidado y futuro, en la medida que la Parte Actora no ha acreditado mediante prueba alguna que permita valorar, con la certeza exigida por la jurisprudencia este tipo de perjuicios.

De esta forma, se ruega al Despacho desestimar la pretensión indemnizatoria de la Accionante, al no estar probada la existencia y cuantía del perjuicio reclamado.

**SEXTA: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA -VENCIMIENTO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL LITERAL I, NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 164 DEL CPACA-**

Quien pretende la aplicación del poder jurisdiccional del Estado para la resolución de un caso concreto debe hacerlo dentro de los límites que para ello ha fijado el legislador, los cuales existen con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del estado de convivencia pacífica y vigencia de un orden justo, contenidos en el artículo 2° de la Constitución Política.

En ese orden, la caducidad funge como limitación temporal al derecho de acción de quien pretende acceder a la administración de justicia, de modo que deberá acudir oportuna y diligentemente al Estado para obtener la protección o el restablecimiento de sus derechos. Esto, en procura de garantizar seguridad jurídica en la forma de certeza de la temporalidad de los

derechos y las obligaciones, evitando que los conflictos se perpetúen en el tiempo, así como incentivando la diligencia y celeridad de los interesados en el ejercicio de sus derechos.

La H. Corte Constitucional ha determinado que la caducidad constituye una limitación legítima al derecho de acción, la cual se encuentra al servicio del interés general de obtener seguridad jurídica, negando el acceso a la administración de justicia a la persona que hubiere perdido la oportunidad procesal para hacerlo, evitando así el ineficiente tráfico jurídico. Al respecto, conviene atender a lo desarrollado por la citada corporación en la sentencia C-832 de 2001:

*“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.”*

En semejantes términos ha tratado el H. Consejo de Estado a la caducidad, al tenerla como un límite temporal, perentorio y de orden preclusivo que genera certidumbre, materializando el ejercicio razonable y proporcional de toda persona para acudir a la administración de justicia. De tal forma, que el no ejercicio de un derecho dentro del término fijado por el legislador supone la pérdida de oportunidad para reclamarlo judicialmente, aun cuando quien presuntamente efectuó la vulneración fue la administración pública.

Para el caso del medio de control de reparación directa el literal i, numeral 2°, artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha fijado como límite el término de dos (2) años para accionar contados a partir de la fecha en que acaeció la acción u omisión causante del daño, o desde la fecha en que tuvo o debió tener conocimiento del mismo.

Descendiendo al caso sub judice, en caso que se evidencie la configuración del término mencionado, ruego al Despacho así sea declarado en el presente asunto.

#### **SÉPTIMA: EXCEPCIÓN GENÉRICA**

Se propone para que se de aplicación a lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### **IV. PETICIÓN DE PRUEBAS.**

Respetuosamente solicitamos, al momento de fallar, tener en cuenta las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

**1. Interrogatorio de parte.**

Solicito de manera respetuosa se fije fecha y hora para interrogar a los demandantes, con el fin de que contesten las preguntas que les formularé personalmente o mediante escrito presentado ante el Despacho, respecto de los hechos y pretensiones de la demanda y de esta contestación.

**2. Finalmente, manifiesto que me reservo el derecho de intervenir en la práctica de las pruebas solicitadas por las partes y en aquellas cuya práctica llegue a decretar de oficio el Despacho.**

**V. ANEXOS**

I. Certificado de Existencia y Representación Legal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A..

II. Poder Especial para obrar otorgado por el Representante Legal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

III. Documentos relacionados en el acápite de pruebas.

**VI. NOTIFICACIONES**

- Mi poderdante al correo electrónico [notificacionesjudiciales@suramericana.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co)
- Los demandantes y el demandado en las direcciones indicadas dentro del escrito de demanda y en la contestación de demanda, respectivamente.
- El suscrito, en la Carrera 7 No. 3ª – 169 Sur. Local 2 de Neiva – Huila, correo electrónico [rantunduaga@arcaabogados.com](mailto:rantunduaga@arcaabogados.com)

Del señor Juez,

**RODRIGO ALBERTO ARTUNDUAGA CASTRO**

C.C. No. 7.724.012 de Neiva (Huila)

T.P. 162.116 del C.S. de la J.